

Rogelio Alonso

La polarización en torno a la política antiterrorista en España entre 2004 y 2006

Introducción

La política antiterrorista ha servido a lo largo de los dos últimos años para alimentar un constante enfrentamiento entre el gobierno español y el principal partido de la oposición. Las sucesivas polémicas suscitadas en torno a tan importante aspecto de la política gubernamental contrastan con el consenso existente en torno a la estrategia antiterrorista durante la pasada legislatura. La política antiterrorista ha constituido, junto a la reorganización territorial, uno de los aspectos más discutidos y controvertidos desde que el Partido Socialista Obrero Español alcanzara el gobierno de la nación tras las elecciones generales de marzo de 2004. Los atentados perpetrados por terroristas islamistas en la capital de España en los que perdieron la vida 191 personas a tan solo tres días de los comicios y, particularmente, los comportamientos que se sucedieron tras el atentado, contribuyeron a resquebrajar el consenso en torno a uno de los aspectos, la respuesta al fenómeno terrorista, que precisamente había servido con anterioridad para unir a los principales partidos democráticos y a la sociedad española. La brutal irrupción del terrorismo islamista en aquellas fechas aportó un elemento de disputa entre gobierno y oposición que además se vería complementado gradualmente por las divergentes posturas mantenidas en torno a la política antiterrorista hacia ETA, la organización terrorista responsable del mayor número de víctimas mortales a lo largo de las últimas tres décadas. En consecuencia, y teniendo presente esta doble dimensión que abarca tanto al fenómeno terrorista islamista como al de ideología nacionalista perpetrado por ETA, este capítulo analizará los factores que permiten explicar el origen de tan importante ruptura en torno a la política antiterrorista y las consecuencias que se han derivado de la misma durante el período comprendido entre los comicios generales de

2004 y julio de 2006, momento en el que se terminaron de redactar estas líneas coincidiendo con el anuncio de la apertura del diálogo entre el gobierno y la organización terrorista ETA.

Los atentados del 11 M: el primer frente de conflicto

A pesar de que nuestro país ha sufrido desde finales de los años sesenta una intensa campaña terrorista de la que ha sido responsable la banda ETA, nunca antes de marzo de 2004 se había perpetrado en España un atentado caracterizado por tan alto grado de letalidad e indiscriminación. Tan brutal acción terrorista se produjo en un contexto particularmente delicado como es el de una campaña electoral que se aproximaba ya a su conclusión. Esta coincidencia hacía inevitable que los resultados finales fuesen interpretados desde la interrelación de ambos acontecimientos por la influencia que uno y otro pudieran haber tenido entre ellos. Esta cuestión, junto a los comportamientos de destacados actores políticos durante el período comprendido entre la comisión de la masacre y la consulta electoral, dieron lugar a un duro enfrentamiento político que se agravaría a lo largo de la nueva legislatura, tal y como se sintetizará a continuación.

El análisis de las particulares circunstancias que en el ámbito español confluyeron en aquellos decisivos días obliga a destacar que en realidad no es extraña la vinculación entre procesos electorales y violencia, si bien la experiencia demuestra que la incidencia de ésta sobre aquéllos no coincide siempre con las intenciones de quienes perpetran dichos actos violentos produciendo, en ocasiones, efectos contrarios a los deseados por los terroristas (Rapoport/Weinberg 2000: 12-50, Alonso 2005: 145-146). Obsérvese por ejemplo cómo en contextos como el de España y el Reino Unido la violencia de ETA o del IRA, que durante décadas han padecido sus sistemas democráticos, ha generado negativos efectos para los terroristas al provocar respuestas defensivas de sus sociedades de manera que éstas han terminado adoptando una posición de rechazo más sólida frente a planteamientos que pretendían imponerse mediante el terror. La presencia pública que el terrorismo garantiza al terrorista no le confiere a éste necesariamente una legitimidad (Schmid 1989: 561). Es la respuesta al terrorismo la que determinará que el acto terrorista sea interpretado como eficaz o ineficaz al

condicionar la influencia que la violencia va a terminar teniendo. De ese modo, una diferente respuesta por parte de las autoridades frente a la excepcional situación que una masacre como el 11-M supuso podría haber provocado una reacción muy distinta ante un hecho tan brutal. La gestión gubernamental del mayor atentado de la historia fue sin duda alguna deficiente, favoreciendo una situación que deterioraría considerablemente las relaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, deterioro que tendría también su reflejo en una mayor disensión en torno a factores claves de la política antiterrorista.

Varios son los errores que es posible apreciar en la gestión de una crisis como la referida y que podrían haber disuadido a un significativo sector de votantes a la hora de decidir si debían respaldar electoralmente al partido en el gobierno. La primera de esas equivocaciones radica en el error de atribuir la autoría de la matanza a la organización terrorista ETA a pesar de la ausencia de pruebas concluyentes que así lo demostraran. Ciertamente es que el presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, precedió al ministro del Interior español, Ángel Acebes, en su atribución de responsabilidades compareciendo ante los medios de comunicación horas antes que éste último para enfatizar su condena a ETA al considerarla autora de la masacre. Asimismo, a pesar de que el *modus operandi* de los responsables de la atrocidad no coincidía con el habitualmente utilizado por la organización terrorista vasca, el incremento de la letalidad que el atentado del 11-M supuso en relación con previos asesinatos de ETA no constituía por sí solo un argumento suficiente para descartar inicialmente la autoría de esta organización. En los meses anteriores, desde diversos ámbitos del grupo terrorista se había propugnado durante un debate interno “agudizar” el conflicto “desechando algunos tabúes”¹, aludiendo así a la posibilidad de intensificar el nivel de letalidad de sus acciones terroristas. Unos años antes documentos intervenidos a ETA en Francia recogían propuestas de sus militantes a los dirigentes planteando la comisión de atentados contra el metro de Madrid.² La detención semanas antes del 11-M de dos etarras en Cuenca con un vehículo cargado de una ingente cantidad de explosivos confirmaba las intenciones de ETA de perpetrar un atentado

¹ Domínguez, Florencio: “El último tabú de ETA”, en: *La Vanguardia*, 12/03/2004.

² *Ibid.*

que en la lógica de la organización terrorista podría describirse como “espectacular” ante la magnitud del mismo que era posible anticipar. Si las fuerzas de seguridad no hubiesen tenido éxito y el atentado se hubiese materializado, se desconoce cuáles habrían sido las consecuencias del mismo, pues nunca antes había utilizado tanta cantidad de explosivos esta organización, siendo por tanto difícil predecir por su parte los efectos de la explosión. La juventud e inexperiencia ya demostrada por otros activistas etarras podría haber provocado en este caso una masacre dada la magnitud del atentado que se pretendía perpetrar. Ese mismo escenario podría haberse producido en diciembre de 2003 cuando dos terroristas introdujeron una maleta con veinticinco kilos de explosivo en un tren que cubría el trayecto de San Sebastián a Madrid con la intención de que estallara en la estación de Chamartín, atentado abortado por las fuerzas de seguridad al igual que ocurrió con el que preparaban los dos etarras que un año antes, el 17 de diciembre de 2002, intentaron introducir en la capital del país 130 kilos de explosivos, divididos en cinco bombas, cuando fueron interceptados por la Guardia Civil. Asimismo, según el testimonio de un detenido por su presunta vinculación con la banda terrorista, ETA planeó la colocación de cuatro coches-bomba en distintos puntos de Madrid si bien abandonó la idea tras “la gran conmoción” provocada por los atentados del 11 de marzo.³ En este sentido es oportuno señalar que los atentados cometidos por ETA en el verano de 2004 fueron acompañados de errores en la comunicación de los mismos anunciando en diversas ocasiones la colocación de explosivos cuando éstos ya habían estallado. Según expertos policiales, estas equivocaciones podrían haber acarreado “trágicas consecuencias” si la banda terrorista preparase algún atentado en un lugar concurrido siguiendo el mismo modelo y creyendo que podría ser evacuado el escenario mediante una llamada que resultaría ineficaz.⁴

Sin embargo, semejantes precedentes resultaban insuficientes para responsabilizar a la organización terrorista ETA con absoluta certeza de la matanza perpetrada en marzo de 2004 ante la ausencia de pruebas

³ “ETA suspendió un atentado en Madrid con cuatro coches bomba tras el 11-M”, en: *El País*, 9/10/2004.

⁴ “ETA anunció el atentado de Irún 15 horas después de que la bomba hubiese estallado”, en: *El Correo*, 17/09/2004.

que así lo constataran. La lógica inercia que tras décadas de violencia hacía razonable en un principio considerar a ETA como responsable de la matanza, no se veía corroborada por hechos irrefutables como los que podrían haberse desprendido de la captación de imágenes a través de las cámaras de circuito cerrado ubicadas en las inmediaciones de los diferentes escenarios donde se perpetraron los atentados. Por lo tanto, si imposible resultaba concluir con seguridad la autoría de ETA, un correcto proceder por parte del gobierno obligaba a asumir dicho extremo, siendo además aconsejable semejante actitud ante las alertas que desde diversas fuentes y organismos se habían transmitido a las autoridades sobre el creciente riesgo de que nuestro país se convirtiera en víctima del terrorismo islamista. Ya en 2001 un informe de la fiscalía de Milán informaba que España se había convertido en “la principal base de Al Qaeda en Europa”⁵ como consecuencia de las actividades desempeñadas por redes de terroristas islamistas que concluirían con las detenciones de diversos activistas a finales de ese año. En 2003 un informe de Europol advertía de los riesgos para la seguridad de España en los siguientes términos: “Varios grupos terroristas que bajo el liderazgo de Al Qaeda conforman el denominado Frente Islámico Mundial, así como aquellos que propugnan la internacionalización de la *jihād* a escala global continúan representando la mayor amenaza para nuestros intereses así como para los intereses del resto de los Estados miembros de la Unión Europea. El apoyo del gobierno español a la intervención militar en Irak por parte de los Estados Unidos y sus aliados constituye sin duda un factor de riesgo adicional para España, si bien puede que no sea el más importante o peligroso”.⁶

La errónea atribución de responsabilidades a la organización terrorista ETA fue seguida de otras desacertadas respuestas gubernamentales, como evidencia el hecho de que el presidente del gobierno en aquellos momentos eludiera convocar al Gabinete de Crisis, órgano legalmente previsto para situaciones de emergencia, o al Director del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Dezcallar. En cambio, el partido en el

⁵ Irujo, José María: “Al Qaeda convirtió España en la base principal de su red en Europa”, en: *El País*, 3/03/2002.

⁶ *Terrorist Activity in the European Union: Situation and Trends Report (TE-SAT)*, October 2002-15 October 2003, Europol, 3/12/2003, p. 37.

gobierno continuó insistiendo en la autoría etarra promoviendo además una resolución de condena del Consejo de Seguridad de la ONU con explícita referencia a ETA, lo que obligaría posteriormente al embajador español ante el organismo internacional a presentar públicamente sus disculpas ante tamaña equivocación.⁷ Si imposible resultaba demostrar la autoría de ETA en aquellas fechas, poco plausible parece dos años después vincular a la organización terrorista vasca en los atentados ante la ausencia de pruebas que así lo indiquen, habiendo expuesto por el contrario la investigación policial y judicial que la responsabilidad del atentado recayó sobre un grupo de radicales islamistas inspirados en la ideología de Al Qaeda.⁸ Sin embargo la creencia en la vinculación de ETA ha sido mantenida desde varios e influyentes medios de comunicación contando con el apoyo de representantes políticos del principal partido de la oposición. Esta actitud ha llevado incluso a cuestionar la investigación policial y judicial erigiéndose en uno de los factores de disputa que más ha contribuido a la polarización entre las principales formaciones políticas en nuestro país y algunos de sus sectores sociales de referencia. Esta variable ha facilitado la reproducción de una confrontación política que ya se manifestó durante los días inmediatamente posteriores al atentado, estadio en el que los diferentes encuadres de los atentados terroristas por parte de los partidos políticos mayoritarios dieron lugar a opuestos posicionamientos.

Por un lado el gobierno fue incapaz de contrarrestar con credibilidad el encuadre del Partido Socialista y de otras fuerzas opositoras que lograron presentar el atentado del 11-M como una consecuencia directa del apoyo de José María Aznar a la intervención estadounidense en Irak (Olmeda 2005). La gestión de crisis del gobierno fue eficazmente presentada desde la oposición como repleta de falsedades ante la insistencia en la autoría de ETA, llegándose incluso a trasladar la culpa de los atentados a las propias autoridades, como las manifestaciones ante las sedes del Partido Popular en diferentes ciudades de España constataron. Así pues, varias fueron las interpretaciones erróneas que se realiza-

⁷ “El embajador español en la ONU se disculpa por impulsar una resolución contra ETA el 11-M”, en: *El Mundo*, 27/03/2004.

⁸ Juzgado Central de Instrucción Número 6, Audiencia Nacional, Madrid: Sumario N° 20/2004, Madrid, Auto, 10/04/2006.

ron a propósito de tan relevantes episodios. Por un lado desde algunos sectores se estableció una directa relación causal entre los atentados del 11-M y los posteriores resultados electorales sin prestar la debida atención al contexto en el que se produjeron, marco que en modo alguno podía circunscribirse a los sucesos acontecidos en los días inmediatamente anteriores a las elecciones (Santamaría 2004).⁹ En realidad determinadas encuestas de opinión anteriores a los comicios y a los propios atentados terroristas mostraban que la diferencia entre el partido en el gobierno y la oposición se estaba estrechando paulatinamente hasta el punto de que una victoria de esta última formación no resultaba improbable (Lago y Montero 2005). Al mismo tiempo tampoco puede ignorarse que la conmoción por los atentados reactivó el mayoritario rechazo que la sociedad española había manifestado contra la postura del gobierno en defensa de la intervención en Irak.¹⁰ Sin embargo, no es posible concluir que la causa directa de los atentados fuese la política española respecto a Irak, tal y como evidencia el hecho de que la campaña preparada por los terroristas tuviera una continuidad incluso después del triunfo electoral del Partido Socialista y de que se procediera a retirar las tropas españolas de la región, medida ésta anunciada ya durante la campaña electoral.

Las investigaciones judiciales emprendidas corroboran que las actividades de muchos de los individuos implicados en los atentados se remontan a un período anterior a la intervención en Irak o incluso a la de Afganistán en 2001 hasta el punto de que muchos de ellos manifestaban ya desde esa época una “mentalidad para la *jiyah*”. En realidad no sería extraño que los terroristas hubiesen encontrado un fuerte ele-

⁹ Sobre el contexto en el que se desarrollaron dichas elecciones y la importancia del mismo véase el interesante artículo de Santamaría, Julián: “El azar y el contexto”, en: *Claves de Razón Práctica*, número 146, 2004, pp. 28-40. Sobre esta cuestión puede consultarse también Barreiro, Belén: “14-M: Elecciones a la sombra del terrorismo”, en: *Claves de Razón Práctica*, número 141, 2004, 14-22.

¹⁰ La masiva oposición a la intervención militar en Irak quedaba reflejada en vísperas de las elecciones a través de una encuesta realizada por Gallup a finales del mes de febrero en la que únicamente un 20% de los encuestados apoyaban la presencia de tropas en el citado país. Por el contrario, un 67% de los encuestados coincidían en señalar que no habían existido motivos suficientes para iniciar una guerra en Irak. “El 80% rechaza la permanencia de las tropas en Irak en las condiciones actuales”, en: *El Mundo*, 18/03/2004.

mento de motivación en el sentimiento de venganza generado por las detenciones de destacados radicales islamistas a finales de 2001, entre ellos, el líder de la denominada célula de Al Qaeda en España, Imad Eddin Barakat Yarkas, alias *Abu Dahdah* (Reinares 2004: 36-37). Asimismo, incluso en el caso de que se asumiera que la motivación fundamental de los terroristas fue la de castigar al gobierno responsable de la presencia militar en Irak, debe insistirse en que una diferente gestión de la crisis por parte del gobierno hubiera podido contribuir al reforzamiento de su credibilidad en lugar de deteriorarla en tan cruciales momentos. Estas consideraciones demuestran la inconsistencia del argumento que identifica como causa del atentado del 11 de marzo la intención de desalojar del poder al Partido Popular pues, como se ha señalado, el acto terrorista podría haber provocado reacciones de apoyo al gobierno de haberse gestionado la crisis de una manera más eficaz. Semejante constatación resulta necesaria habida cuenta de que la atribución de los atentados a la lógica descrita ha sido utilizada por algunos observadores y políticos con objeto de cuestionar la victoria del Partido Socialista, introduciéndose así otro elemento de disenso entre las principales fuerzas políticas.

Estas apreciaciones exponen lo contraproducente que resulta abundar en disputas en torno al 11-M que dos años después continúan ocupando un preeminente lugar en el debate entre los principales partidos políticos. El frente de conflicto inaugurado en aquel entonces se vio consolidado durante el período en el que la Comisión de Investigación de los atentados realizó sus trabajos desde su creación en mayo de 2004 hasta su conclusión en junio de 2005. Dicha comisión parlamentaria fue incapaz de reconstruir el consenso en torno a aspectos relevantes para la política antiterrorista, sirviendo por el contrario para el rearme retórico de las principales formaciones políticas que se reafirmaron en la mayor parte de los posicionamientos adoptados durante los fatídicos días de marzo de 2004. Así lo ilustraban las comparecencias de sus máximos dirigentes, pues mientras José María Aznar se negó a reconocer los errores de su gestión durante tan decisivo período, insistiendo en alimentar dudas sobre la autoría islamista mediante la vinculación con ETA, José Luis Rodríguez Zapatero eludió también un necesario reconocimiento de sus responsabilidades en relación con una jornada de reflexión en la que las sedes del partido que entonces ocupaba el gobierno fueron rodeadas por manifestantes. El prestigioso analista

Patxo Unzueta ha expresado con precisión las consecuencias que se derivan de esa situación: “No es cierto, como le acusa el PP, que organizara el acoso del sábado de reflexión. Pero tampoco convocó a los medios para decir que consideraba injusto llamar asesinos a los del PP y que fascistas eran los que intentaron quemar sus locales, ni para desautorizar claramente las concentraciones del 13-M. Ese día se sentó un precedente que ojalá no sea invocado en el futuro para justificar concentraciones similares, con cualquier pretexto ante las sedes socialistas”.¹¹ Por ello, la Comisión de Investigación hubiese brindado una buena oportunidad para que, como señalaba Unzueta, el presidente del gobierno “se diferenciase de su antecesor, incapaz de reconocer error alguno, y diga que eso, el acoso a las sedes al grito de asesinos, estuvo mal, y que tal vez debió haberlo dicho en su momento”.¹²

Finalmente el pleno del Congreso de los Diputados aprobó en junio de 2005 el dictamen elaborado por la mayoría de la Comisión de Investigación del 11-M indicando que el anterior gobierno “infravaloró” el riesgo de un atentado islamista a la vez que “manipuló” con un interés electoralista la información sobre el atentado en las horas posteriores al mismo.¹³ Las conclusiones elaboradas por socialistas y populares se oponían frontalmente coincidiendo en la común acusación de manipulación que los adversarios se intercambiaron transmitiendo a la opinión pública la imagen de que la legitimidad del resultado electoral seguía constituyendo un elemento prioritario de la contienda política por encima del interés por detectar y mejorar vulnerabilidades de la seguridad del Estado.¹⁴ Las consecuencias de esta antagónica actitud las anticipaba Enrique Gil Calvo en los siguientes términos: “El PSOE le echa en cara la masacre al PP, acusándole de provocarla con su imprevisión y de manipularla con fines electorales, mientras el PP hace lo mismo con el PSOE, acusándole de sacar partido de 191 muertos. Pero si descontamos su excesiva violencia verbal, ambas acusaciones tienen un induda-

¹¹ Unzueta, Patxo: “Sin rencor, con humildad”, en: *El País*, 2/12/2004.

¹² *Ibid.*

¹³ *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, VIII Legislatura, 14 de julio de 2005, Número 242.

¹⁴ Un resumen de las conclusiones de los principales partidos elaboradas por la Comisión puede encontrarse en Rodríguez, Jorge: “El PSOE concluye que el gobierno de Aznar manipuló los datos del 11-M por interés electoral”, en: *El País*, 9/06/2005.

ble fondo de verdad. Y mientras cada parte se empeña en culpar a la otra sin reconocer su propia responsabilidad inconfesable, la crisis del 11/14-M seguirá abierta en carne viva, la ruptura entre los partidos se ahondará cada vez más y las víctimas seguirán privadas de dignidad tras haber muerto en balde.”¹⁵

Aunque los atentados perpetrados en Estados Unidos en 2001 alertaron sobre la necesidad de reformar los sistemas de prevención y combate del terrorismo tanto en Europa como en América, propiciando iniciativas y acelerando dinámicas que perseguían fortalecer la cooperación transatlántica, la masacre del 11-M sirvió para demostrar la insuficiencia de dichas medidas. Si bien días antes de los atentados en Estados Unidos el Parlamento europeo había llamado la atención sobre la lenta respuesta de la Unión Europea a la amenaza terrorista, los brutales ataques terroristas sirvieron de catalizador para alcanzar acuerdos sobre diversos compromisos en la Cumbre Europea de Laeken celebrada en diciembre de ese año, entre ellos medidas destinadas a combatir la financiación del terrorismo. Como consecuencia de todo ello, en el verano de 2002 el Consejo de Ministros de Interior y Justicia aprobó la definición común de terrorismo, la creación de equipos conjuntos de investigación y la aprobación de la Euroorden que entraría en vigor en 2004. En 2003 la Unión Europea y Estados Unidos alcanzaban un acuerdo de asistencia legal mutua y extradición que permitía la entrega de terroristas siempre y cuando no pudiesen ser sometidos a una condena de muerte. Asimismo se acordaron protocolos de intercambio de información e inteligencia entre Europol y Estados Unidos reforzándose además los contactos con Eurojust y los mecanismos que permitiesen congelar cuentas y fondos. La creciente preocupación ante la amenaza terrorista inspiró la elaboración del documento *Una Europa segura en un mundo mejor*, hecho público en junio de 2003. Su autor, el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Javier Solana, reconocía por aquel entonces que se debería “haber hecho frente a Al Qaeda mucho antes”¹⁶, al tiempo que asu-

¹⁵ Gil Calvo, Enrique, “El cambio trágico”, en: *El País* 5/03/2005. Una mayor elaboración de estos argumentos puede encontrarse en Gil Calvo, Enrique: *11-14 M: El cambio trágico. De la masacre al vuelco electoral*. Madrid, 2005.

¹⁶ Solana, Javier: *Una Europa segura en un mundo mejor*. Tesalónica: Consejo Europeo, 20 de junio de 2003, pp. 11-12.

mía que el necesario aumento de las capacidades de la Unión con el objeto de afrontar la amenaza del terrorismo internacional requeriría tiempo.

Resulta paradójico que si bien Estados Unidos llegó a alabar en 2002 los éxitos españoles al aprehender a destacados dirigentes de la denominada “célula española de Al Qaeda”, calificando entonces a España de “campeona” en la lucha contra el terrorismo islámico¹⁷, algunas de las personas relacionadas con dichos activistas serían precisamente los responsables de cometer el mayor atentado terrorista en nuestro país el fatídico 11 M. El deficiente o insuficiente desarrollo de las estructuras de seguridad facilitó que España se convirtiera, como señalaba un alarmante informe de la fiscalía de Milán en 2001, en “la base principal de Al Qaeda en Europa”.¹⁸ En unos años nuestro país se había transformado en “uno de los santuarios favoritos” del terrorismo islamista¹⁹, de ahí que los servicios de inteligencia interpretaran como inevitable un nuevo atentado terrorista islamista²⁰, siendo además probable que éste tuviera lugar en territorio español. Así se desprende de las declaraciones en 2002 del entonces presidente del gobierno, José María Aznar, tras la detención de Imad Eddin Barakat, alias *Abu Dahdah*, responsable de Al Qaeda en España: “Todos los países tenemos que estar preparados, porque todos podemos ser objeto de atentados, y en todos los países hay células durmientes”.²¹ A pesar de éstas y otras advertencias, finalmente los terroristas tuvieron éxito, revelando por tanto la insuficiencia de los sistemas de prevención. No sólo se explica semejante fracaso aludiendo al deficiente desarrollo de la cooperación y de la coordinación entre países y agencias, sino también mediante la constatación de los limitados recursos materiales y humanos de los que

¹⁷ “Los jueces sólo entregarán datos a EE.UU. sobre el 11-S si no se usan para condenar a muerte”, en: *El País*, 9/06/2002.

¹⁸ Irujo, José María: “Al Qaeda convirtió España en la base principal de su red en Europa”, en: *El País*, 3/03/2002.

¹⁹ Valenzuela, Javier: *España en el punto de mira. La amenaza del integrismo islámico*. Madrid, 2002, p. 64.

²⁰ Un informe confidencial elaborado por Europol en junio de 2002 advirtió en relación con la amenaza del terrorismo islamista que “La principal pregunta no es si habrá otro ataque, sino quién lo hará, cuándo y contra qué objetivos”, citado en Irujo, José María: *El agujero. España invadida por la yihad*. Madrid, 2005, p. 207.

²¹ *Ibid.*, p. 164.

disponían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como ilustra gráficamente el máximo responsable de la Comisaría General de Información, el comisario Jesús de la Morena, al reconocer que pese al conocimiento de la existencia de activistas terroristas islamistas en España, sólo fue posible seguir investigaciones puntuales sobre sus actividades al estar dotada la policía de una “estructura de juguete”.²² En definitiva, y como reconoció ante la Comisión de Investigación Ignacio Astarloa, secretario de Estado de seguridad durante el gobierno del Partido Popular, se cometieron importantes errores²³, realidad que no puede ocultar la complejidad e imposibilidad de impedir en su totalidad la materialización de preparativos terroristas en atentados.

El abandono del Pacto por las Libertades: la consolidación de la polarización

Las actitudes que los principales partidos exhibieron frente al fenómeno terrorista islamista antes y después de los atentados del 11-M abrieron un frente de conflicto que muy pronto se vería complementado por otro en torno a la política antiterrorista hacia ETA. El consenso dominante durante la anterior legislatura que adoptó la forma del denominado Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo firmado por el Partido Socialista y el Partido Popular en 2000, fue gradualmente abandonado, sin que ambas formaciones apenas se hayan reunido al amparo de dicha iniciativa desde la constitución del nuevo gobierno en 2004. La falta de consenso y la disputa en torno a esta decisiva faceta de la política antiterrorista ha sido prácticamente total a lo largo de los últimos años, evidenciándose con claridad en mayo de 2005, momento en el que el Congreso de los Diputados aprobó una resolución de Lucha contra el Terrorismo con el respaldo mayoritario de la cámara y la oposición del Partido Popular. Los contenidos de dicha resolución no diferían sustancialmente de lo acordado años atrás en el denominado Pacto de Ajuria

²² *Ibíd.*, p. 195.

²³ Cortes Generales, *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, Comisiones de Investigación, Año 2004, VIII Legislatura Núm. 18, Sesión Núm. 31, 18/11/2004.

Enea con el beneplácito de las principales formaciones políticas. A pesar de ello la forma en la que la referida resolución fue planteada facilitó el rechazo a la misma por parte del Partido Popular, socio del Partido Socialista en el ya citado Pacto por las Libertades que, sin embargo, no fue previamente informado de las intenciones gubernamentales. Ciertamente es que la política antiterrorista debe ser dirigida por el partido en el gobierno, tal y como reconocía el punto número 1 de este importante acuerdo, si bien el mismo pacto reconocía que: “El objetivo de este acuerdo, impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, exige una colaboración permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que implica el intercambio de información, la actuación concertada en los ámbitos recogidos en el presente Acuerdo –reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones– y la búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los acontecimientos que afecten a la política antiterrorista”.

La resolución de mayo de 2005 suponía sin duda un significativo cambio de estrategia antiterrorista al abrir la expectativa de negociación con la organización terrorista ETA, si bien en determinadas condiciones. El alcance de esa iniciativa y el compromiso de “búsqueda de posiciones conjuntas” recogido en el Pacto por las Libertades requería que el encargado de dirigir la política antiterrorista, esto es, el gobierno, facilitase información al otro integrante del pacto sobre las causas que le llevaban a abandonar la posición hasta entonces mantenida en la que se negaba cualquier posibilidad de diálogo con la banda o su entorno ilegalizado. Las consecuencias de plantear la resolución en ausencia de dicha información previa derivó en un comportamiento aparentemente incoherente que el analista Patxo Unzueta describió así: “Aún se entiende menos que, habiendo un cambio de política antiterrorista (tomar la iniciativa de ofrecer negociaciones condicionadas), y reconociéndose que para que prospere se necesita el acuerdo del PP, no se comparta la información con Rajoy y, por el contrario, se ponga a votación una propuesta que intercambia el respaldo de al menos 312 diputados por el apoyo de 202”.²⁴ El método utilizado por el gobierno dificultaba alcanzar un consenso muy necesario en torno a tan significativa

²⁴ Unzueta, Patxo: “Hable con ella, Otegui”, en: *El País*, 19/05/2005.

medida, lo cual no parecía justificar la reacción del líder de la oposición Mariano Rajoy ante la presentación de dicha resolución acusando al presidente del gobierno de “traicionar a los muertos”. De ese modo la forma en la que por un lado el gobierno presentó dicha resolución, así como los argumentos con los que se criticaron desde la oposición, crearon el contexto para un disenso que a partir de ese momento no dejaría de crecer.

A pesar de la similitud que era posible apreciar entre los contenidos de la resolución de mayo de 2005 y los del Pacto de Ajuria Enea de 1988, la declaración del Congreso contenía un relevante potencial para reforzar divergencias. En ella el diálogo “entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia” quedaba condicionado a que ETA manifestase “una clara voluntad para poner fin a la violencia” mediante “actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción”.²⁵ Se establecían por tanto unos límites que favorecieron un amplio respaldo a la citada proposición. Sin embargo, la fórmula elegida alentaba también la confusión al no precisar con absoluta claridad cuáles eran realmente las obligaciones objetivas que se le exigían a ETA. Es decir, en una hipotética situación de tregua la interpretación de cuáles debían ser las “actitudes inequívocas que puedan conducir a la convicción” de que ETA desearía concluir su campaña, era susceptible de crear una mayor división entre los principales partidos políticos. En realidad, el doble diálogo con ETA y Batasuna, diferenciado pero simultáneo, que el gobierno aceptaba en la resolución del congreso, favorecía los intereses del movimiento terrorista rebajando las normales exigencias democráticas. Suponía además reconocer a ETA como interlocutor legítimo asumiéndose como positiva y suficiente una mera declaración de alto el fuego aunque ésta no equivaliese a la total desaparición del grupo terrorista.

El tiempo demostraría que los temores suscitados por la ambigüedad de una resolución aparentemente clara estaban fundados. Así, tres meses después de que ETA declararse el 22 de marzo de 2006 un “alto el fuego permanente”, el gobierno anunció la apertura del diálogo con

²⁵ “Lucha contra el Terrorismo”, Resolución número 32 aprobada por el Pleno de la Cámara, *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, número 206, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, 20 de mayo de 2005.

la organización terrorista a pesar de que las condiciones impuestas en la resolución del congreso no se hubiesen materializado. En mayo de 2006 el presidente del gobierno indicó que en junio de ese mismo año anunciaría la apertura de dicho diálogo en un contexto que contradecía claramente las condiciones marcadas por el texto del congreso. Así lo demostraba el hecho de que tan solo unos días antes el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asegurara que “el gobierno sigue sin la convicción de que ETA quiere poner fin a la violencia”.²⁶ Debe recordarse que las amenazas de dirigentes de Batasuna precedieron al cambio de actitud gubernamental suscitando por ello lógicos interrogantes sobre los motivos por los cuales el gobierno estimó necesario dar credibilidad a la coacción del entorno terrorista. Tal y como se reveló posteriormente, Zapatero anunció que un mes más tarde anunciaría la apertura del diálogo en un momento en el que Batasuna amenazó con bloquear el proceso si sus líderes iban a la cárcel tras comparecer en la Audiencia Nacional en el marco de sumarios abiertos como consecuencia de actividades que podían ir en contra de su ilegalización por la Ley de Partidos.²⁷

El presidente realizó además tan relevante anuncio en un acto de partido, circunstancia ésta que fue criticada por otras formaciones políticas que entendieron inapropiado semejante foro para tratar una cuestión de Estado de esas características. Unos días más tarde se produjo otro gesto que contribuiría a ahondar la ruptura de los principales partidos, pues el dirigente del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, anunció que se reuniría próximamente con Batasuna a pesar de ser ésta una organización ilegalizada. Si bien tanto el presidente del gobierno como Batasuna conocieron con antelación dicha iniciativa con la que se pretendía evitar el boicot de la formación ilegalizada al proceso de diálogo, el líder de la oposición tuvo conocimiento de la noticia a través de los medios de comunicación. En ese contexto las reacciones comprendieron desde la denuncia del secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, enfatizando que “el proyecto de Zapatero es el

²⁶ “El gobierno admite que sigue sin la convicción de que ETA quiere poner fin a la violencia”, en: *El Correo*, 17/05/2006.

²⁷ Aizpeolea, Luis y Guenaga, Aitor: “Batasuna prepara su legalización para este verano”, en: *El País*, 4/06/2006.

proyecto de ETA”, hasta la crítica de Maite Pagazaurtunda, concejal socialista y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, sobre las consecuencias de las medidas descritas: “Lo que sí es evidente es que el gobierno ha buscado un espacio que le permitiera muchos movimientos y con una cierta distancia con respecto al colectivo de víctimas y también con mucha distancia con respecto al Partido Popular. Son seguramente indeseados pero son efectos que se generan en el corazón de personas que tienen miedo de que pueda existir la tentación de la impunidad”.²⁸ Revelador resultaba en ese sentido el comunicado emitido por un influyente movimiento cívico no partidista como ¡Basta Ya! en el que advertía que “reconocer a Batasuna como un *interlocutor necesario* implica de modo inevitable cierta legitimación de la violencia como instrumento político válido, pues ese *interlocutor* no representa otra cosa que los intereses de una banda terrorista que se niega a desaparecer e impone condiciones para dejar de matar definitivamente”. En consecuencia, el movimiento social subrayaba que “la celebración de esa reunión ya constituye un pago político a ETA porque reconoce a su brazo político como un partido tan legítimo como los verdaderos partidos democráticos que ellos han perseguido cruelmente todos estos años.” Por ello ¡Basta Ya! concluía que “aceptar una negociación política con ETA puede llevar a perder una oportunidad histórica para derrotar a la banda definitivamente”.²⁹

El disenso entre gobierno y oposición se ha visto reforzado constantemente porque la creencia del primero en las posibilidades del final del terrorismo no ha ido acompañada de actos que la acrediten suficientemente, ignorándose que es ETA la que debe generar dicha confianza en una sociedad que con toda lógica desconfía de las intenciones de una organización terrorista responsable del asesinato de centenares de personas. Obviar el condicionante de la violencia tras décadas de terrorismo y las reticencias que en amplios sectores victimizados genera esa suerte de compulsivo acto de fe que se requiere de ellos, supone ignorar lo que realmente implica el terrorismo y las consecuencias del impacto psíquico que la amenaza genera. Por ello resultaba poco convincente valorar

²⁸ Entrevista a Maite Pagazaurtundúa, publicada en *El Mundo*, 28/05/2006.

²⁹ “Iniciativa ciudadana ¡Basta Ya! pide al PSE que no se reúna con Batasuna”, en: <<http://www.bastaya.org/uploads/noticias/index.php?id=3598>> (12/2006)

como positivos distintos comportamientos de Batasuna que hasta la fecha en absoluto evidenciaban el ineludible distanciamiento de la violencia y de ETA que deben requerirse para su normal participación en política. Así ha venido ocurriendo desde que en noviembre de 2004 Batasuna hiciera pública la denominada declaración de Anoeta, presentada por la formación ilegalizada como una propuesta por la construcción de “un proceso que conduzca a la solución y a la paz”.³⁰ Sin embargo, Batasuna continuaba sin distanciarse “un ápice de las tesis tradicionales de la izquierda abertzale que considera que la paz no es el fin de la violencia, sino el triunfo de sus exigencias”.³¹

Las reacciones a la declaración de Anoeta anticipaban un escenario de división que se evitó en aquel entonces para materializarse en los meses posteriores. Días antes de su anuncio tres socialistas guipuzcoanos, entre ellos, Odón Elorza, alcalde de San Sebastián, exigían al presidente Zapatero “valentía” y “asumir algún riesgo para ganar la libertad”.³² Lo hacían antes de hacerse pública una propuesta que, con la falsa apariencia de un nuevo lenguaje pero sin desmarcarse realmente de ETA, pretendía reparar la deteriorada imagen de una marginada Batasuna mediante engañosas expectativas. Precisamente por ello estos socialistas favorecían en cierta medida los intereses del brazo político de la organización terrorista, como sugería la acertada valoración que de la propuesta abertzale hacía entonces el presidente del Senado, Javier Rojo: “Nos tratan de confundir, engañar y mentir y ante eso debemos seguir haciendo lo que hacemos, defender el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico en los términos en los que lo planteamos y la unidad de acción de los demócratas”.³³ La prolongada experiencia de la lucha antiterrorista en nuestro país demuestra que ésta ha alcanzado su mayor eficacia cuando se ha basado en el consenso de las principales fuerzas democráticas. De ahí el peligro de caer en la trampa que Batasuna y ETA planteaban como salida a su profundo aislamiento a unos meses de unas elecciones autonómicas en las que aventuraban un

³⁰ “Oferta política de Batasuna. Ahora el pueblo, ahora la paz”, en: *Gara*, 15/11/2004.

³¹ Domínguez, Florencio: “La farsa de Anoeta”, en: *El Correo*, 22/11/2004.

³² Zabaleta, Gemma/Elorza, Odón/Itxaso, Denis: “Prender la llama de la paz”, en: *El Diario Vasco*, 12/11/2004.

³³ “Javier Rojo cree que la formación abertzale trata de ‘confundir, engañar y mentir’ con su declaración”, en: Europa Press, *Deia*, 16/11/2004.

agravamiento de su situación. Por ello resultaban dañinas peticiones como las de los socialistas guipuzcoanos basadas en la fe en ETA más que en un riguroso análisis de sus dinámicas internas. No obstante, esa fe en la organización terrorista se incrementó gradualmente en ámbitos gubernamentales desembocando en la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la referida resolución de Lucha contra el Terrorismo en mayo de 2005.

Como ya se ha indicado, finalmente el presidente del gobierno anunció en junio de 2006 el inicio del diálogo a pesar de que ETA continuaba sin mostrar “una clara voluntad para poner fin” a la violencia y “actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción”, requisitos que la resolución aprobada por el congreso un año antes exigía para comenzar los contactos con la organización terrorista. Curiosamente el Partido Popular, que entonces rechazó dicha resolución, reclamaría un año después el cumplimiento de esas condiciones que sin embargo Zapatero ignoró, pues resultaba evidente que ETA seguía sin mostrar “actitudes inequívocas” de “una clara voluntad para poner fin a la violencia”. Es éste un hecho objetivo que, hasta el momento de escribir estas líneas, en julio de 2006, tendían a eludir quienes asumían que ETA había interiorizado ya la necesidad de desaparecer de la escena política, creencia que solía apoyarse en la declaración de alto el fuego, los tres años sin víctimas mortales y una supuesta separación de intereses entre Batasuna y ETA. Estos tres factores fueron utilizados para defender una “nueva realidad social” que hasta debería condicionar el comportamiento judicial. Se intentaba de ese modo conformar una realidad basada en percepciones o intereses políticos pero en absoluto en hechos objetivos que demostrasen unas intenciones pacíficas claras e irreversibles por parte de la organización terrorista. Por un lado, tres eran los años sin muertos pero no por voluntad de ETA, pues las detenciones de activistas y la incautación de documentación han confirmado sus intenciones de asesinar en ese mismo período que se vieron frustradas por los éxitos policiales.³⁴ Asimismo, ficticia continuaba siendo esa

³⁴ Véase cómo la detención de dos etarras en febrero de 2005 en Valencia frustró acciones terroristas que perseguían la muerte de varias personas identificadas como objetivos por parte de la banda. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad interceptaron a comienzos de 2005 informaciones en las que dirigentes de la organiza-

separación de intereses entre Batasuna y ETA, organizaciones que todavía permanecían inextricablemente unidas, siendo por ello peligroso asumir que la prematura legalización de la primera pudiese garantizar la desaparición de la segunda, ya que desincentivaría al brazo político para exigir la disolución de la banda. Al mismo tiempo los pronunciamientos de los terroristas desde su declaración de tregua corroboraban la ausencia de “actitudes inequívocas” de la hipotética voluntad de ETA para poner fin a la violencia, llegándose a reconocer explícitamente en alguna de estas ocasiones el carácter reversible de su “alto el fuego”.³⁵ Incluso si se aceptara que dichas manifestaciones representaban gestos de consumo interno, innegable resultaba que ninguna confianza aportaban sobre las supuestas intenciones pacíficas de una banda que seguía

ción terrorista ordenaban a sus subordinados la comisión de asesinatos que finalmente no llegaron a producirse gracias a éxitos policiales. Garikoitz Aspiazu Rubina, considerado como uno de los líderes de la organización terrorista, exigía en enero de 2005 lo siguiente: “Tenemos que poner muertos encima de la mesa cuanto antes. Teniendo en cuenta la situación política, las hostias que nos han dado y que íbamos a hacer un año sin tirar (matar) a nadie, una ekintza (atentado) vendría mejor que bien. Tendréis que poner patas arriba a un enemigo uniformado. En esta situación quedará de la hostia y nos dará mucha fuerza” (Domínguez, Florencio: “Muertos sobre la mesa”, en: *La Vanguardia*, 18/02/2005). La información que el 17 de febrero de 2005 publicaba el diario *El País* con el titular “ETA ordena a sus ‘comandos’ ‘poner muertos encima de la mesa’” resultaba reveladora de las intenciones de la banda al indicar que la dirección de ETA había ordenado recopilar información de numerosos objetivos con el fin último de cometer distintos asesinatos. La intención de cometer asesinatos era corroborada también por el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien en julio de 2006 ordenó la busca y captura internacional para su posterior encarcelamiento del etarra Garikoitz Aspiazu, al que el juez consideraba inductor de dos delitos de asesinato frustrado. En septiembre de 2003 el terrorista ordenó asesinar a los miembros de una patrulla de la policía autónoma vasca, atentado en el que murió el etarra Arkaitz Otazua (“El juez Andreu ordena la captura internacional de ‘Txeroki’, jefe militar de ETA”, en: *El Correo*, 20/07/2006).

³⁵ Entre el período comprendido entre la declaración de alto el fuego en marzo de 2006 y el anuncio por parte del gobierno de la apertura del diálogo con ETA llevado a cabo en junio de ese mismo año la organización terrorista ha emitido dos comunicados. Al mismo tiempo, se hizo público también el documento interno de la banda *Zutabe 110*, fechado en el mes de abril, publicándose además una entrevista con representantes de la organización terrorista en el diario *Gara* el 14/05/2006.

extorsionando pese a su declaración de tregua³⁶, realidad ésta que no convenía minimizar con el fin de evitar la consolidación de una contraproducente impunidad de negativas consecuencias para la gobernabilidad.

Por tanto, en el momento en el que el presidente del gobierno anunció el diálogo con ETA podría haberse afirmado lo mismo que dos días después de la declaración del alto el fuego se aseguraba en un editorial de *El País* de significativo título: “Verificación con calma”: “En sus dos comunicados, ETA mantiene la ambigüedad sobre si su renuncia a las armas es definitiva o condicionada a determinados resultados políticos”. Añadía el editorial: “De acuerdo con la resolución del Congreso, el período de verificación de la ‘clara voluntad de poner fin a la violencia’ que ahora se inicia debería comenzar por acreditar la renuncia definitiva a tales prácticas”, esto es la extorsión y la violencia callejera conocida como *kale borroka*. Se concluía además que: “Una segunda verificación tiene que ver con su carácter irreversible: sin esa garantía no es posible el diálogo con ETA”.³⁷ Es por tanto indiscutible que el carácter irreversible de la tregua no ha sido confirmado, garantía que en aquel entonces sí se planteó como imprescindible para iniciar el diálogo con ETA. Por tanto se había creado un escenario en el cual el gobierno entendió necesario modificar sus exigencias previas. Es evidente que la política antiterrorista la dirige el gobierno de la nación, pero poco razonable resulta esperar que la oposición acepte importantes alteraciones de aquélla si éstas no van precedidas de razonadas explicaciones que han estado ausentes en momentos clave. Así ocurrió al variar el gobierno las condiciones exigidas previamente para iniciar el diálogo con ETA o cuando se prefirió informar a Batasuna de las

³⁶ A finales de junio de 2006 la policía desarticuló una red de extorsión de la organización terrorista ETA que había continuado recaudando dinero para la banda a pesar de la declaración de alto el fuego. Tras las detenciones realizadas como resultado de las investigaciones policiales el magistrado decretó prisión para varios de los implicados. Otálora, Óscar: “La policía halla indicios de que la red desmantelada extorsionó tras la tregua”, en: *El Correo*, 22/06/2006; Otálora, Óscar: “Marlaska investiga los contactos de un alto cargo del PNV con la red de extorsión de ETA”, en: *El Correo*, 23/06/2006; “La Policía constata que ETA envió en los primeros días de junio cartas de extorsión”, en: *El Mundo*, 25/06/2006; Sáiz-Pardo, Melchor: “El juez deja libres a los empresarios pero dice que pagaron a ETA voluntariamente”, en: *El Correo*, 27/06/2006.

³⁷ “Verificación con calma”, en: *El País*, 24/03/2006.

intenciones del PSE de dialogar con la formación ilegalizada mientras el líder de la oposición recibía la noticia por los medios de comunicación. Coherente resultaba cuestionar los motivos por los que el gobierno decidió modificar su postura en tan importante cuestión como respuesta a la coacción de Batasuna amenazando con el colapso del proceso de diálogo si se emprendían acciones judiciales contra sus dirigentes y si las autoridades no realizaban determinados movimientos.

La secuencia de acontecimientos anterior y posterior al alto el fuego de ETA demuestra cómo mediante un determinado discurso público se ha intentado conformar una realidad poco coincidente con la verdadera realidad hasta el momento, asumiéndose además como realistas los planteamientos de la organización terrorista. Así se apreciaba al aceptarse en diversos ámbitos la necesidad de legalizar a Batasuna aunque ETA continuase existiendo, lo que garantizaría una contraproducente legitimación del movimiento terrorista. De ese modo se ha intentado imponer gradualmente una interpretación positiva de señales equívocas en torno a las intenciones de ETA y Batasuna sobre las que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya alertaba en febrero de 2006 al afirmar que: “La historia de la lucha contra el terrorismo está llena de señales equívocas, interpretadas a veces de forma positiva por gobiernos que se han equivocado”.³⁸ La prudencia que de dichas palabras se desprende invitaba a mostrar una mayor comprensión hacia la desconfianza del Partido Popular en torno al diálogo con ETA, si bien el enfrentamiento entre los principales partidos políticos se mantuvo inalterable agudizándose la división entre ambos.

La división de las fuerzas democráticas fue el objetivo que también persiguió el IRA al verse presionado por eficaces medidas antiterroristas que le llevarían a interrumpir su campaña terrorista en Irlanda del Norte. Danny Morrison, prominente dirigente del IRA y del Sinn Féin, lo anunciaba en una carta a Gerry Adams, escrita desde la cárcel en 1992, en la que reconocía que la violencia mantenía unidos a sus enemigos, por lo que sugería detener el terrorismo y explotar el proceso posterior ante las dudas que surgirían sobre su gestión, provocando así la división de los partidos democráticos.³⁹ Consecuente con ese objetivo debe considerar-

³⁸ Entrevista a Alfredo Pérez Rubalcaba en *El País*, 5/02/2006.

³⁹ Morrison, Danny: *Then The Walls Came Down. A Prison Journal*. Dublin, 1999, p. 242.

se la negativa del IRA a desarmarse por completo al tiempo que incumplía las promesas de disolución repetidas por los portavoces del Sinn Féin. Con unas intenciones muy similares encaminadas a profundizar las discrepancias entre las principales formaciones políticas, ETA y su entorno han ido creando expectativas sobre el final del terrorismo, utilizando un lenguaje que seduce a muchos a pesar de la ausencia de pruebas que evidencien una auténtica voluntad de la organización terrorista de disolverse. De ese modo la disminución de algunas de sus acciones terroristas, complementada con una retórica que promete paz y esperanza, sirve como eficaz instrumento de coacción al utilizarse la ansiedad colectiva por que el final de ETA llegue pronto como presión que obligaría a aceptar ciertos “sacrificios y riesgos por la paz”, términos profusamente utilizados en el actual marco político. Por tanto, tras la declaración de tregua muchos han sido quienes han defendido concesiones que inicialmente se rechazaban, pero que en esas circunstancias han presentado como necesarias para consolidar dicho alto el fuego con argumentos que se valen del lógico cansancio de una sociedad afectada por la amenaza terrorista durante décadas, entre ellos la insistencia en la necesidad de aprovechar una oportunidad histórica con el fin de evitar más víctimas. Esta misma dinámica se ha reproducido en Irlanda del Norte, facilitando una contraproducente impunidad política, jurídica y moral que en absoluto ha acercado una verdadera paz.⁴⁰ De esa manera el IRA ha logrado recuperar parcialmente por la vía política lo que perdió políticamente, precedente que podría trasladarse al ámbito vasco si se cometiesen errores de los que creíamos haber aprendido. A este respecto, defender la negociación con ETA recordando que anteriores gobiernos también la acometieron es el mejor argumento para descartar de nuevo su utilización, pues esas experiencias previas han demostrado lo ineficaz y hasta contraproducente de dichos diálogos.⁴¹

⁴⁰ Un análisis más elaborado de este modelo se encuentra en Alonso, Rogelio: “Ante el final del terrorismo de ETA: lecciones y errores de la experiencia norirlandesa”, en: *Análisis del Real Instituto Elcano*, ARI N° 51/2006, mayo de 2006.

⁴¹ Sobre las fracasadas negociaciones con ETA, véase Domínguez, Florencio: *De la negociación a la tregua. ¿El final de ETA?* Madrid, 1998. Sobre los dañinos efectos que para las autoridades democráticas tiene la negociación con organizaciones terroristas, véase el capítulo cuatro de Reinares, Fernando: *Terrorismo y antiterrorismo*. Barcelona, 1999.

Ese es el peligro de la negociación con ETA anunciada en junio de 2006. Aunque se insiste en que dicho diálogo sólo versará sobre la disolución de la banda, el precedente del cambio de criterio adoptado por el gobierno anunciando contactos sin respetar las condiciones previamente impuestas, alerta sobre futuras variaciones. Probablemente Batasuna continuará emitiendo señales equívocas que los partidarios del actual proceso desearán interpretar como muestras de la voluntad de ETA de poner fin a la violencia. Sin embargo, si dichas señales siguen sin ser verdaderas “actitudes inequívocas” de la voluntad de disolución de ETA, serán incapaces de generar la confianza necesaria en las intenciones de la organización terrorista. Injusto y contraproducente sería entonces criticar a quienes desconfían de ETA y Batasuna, así como mantener el diálogo con la justificación de que la ambigüedad resulta necesaria para que el proceso avance. Este argumento ya se vislumbra, anunciándose ahora, en contra de lo asegurado anteriormente, la constitución de una mesa de partidos extraparlamentaria mientras ETA sigue sin desaparecer, peligrosa iniciativa sobre la que el prestigioso filósofo Fernando Savater ya advirtió: “La mesa de partidos, sobre la cual se hará política, pero fuera de las instituciones y bajo la cual estará agazapada ETA ... representa el más alto precio político que la democracia puede pagar al terrorismo”.⁴² Ahora el cambio de actitud se justifica matizando que en dicha mesa sólo se tomarán acuerdos cuando ETA se disuelva, si bien los antecedentes referidos llevan a pensar en una nueva alteración de exigencias hoy aparentemente firmes. Como consecuencia de esta lógica se va liberando a la banda de la presión que debería recaer sobre ella, transfiriéndose la responsabilidad por el mantenimiento del alto el fuego a políticos y ciudadanos, así coaccionados para aceptar condiciones en absoluto democráticas. En modo alguno puede serlo tolerar que una organización terrorista continúe existiendo, manteniéndose estrechamente unida a una formación política a pesar de las declaraciones formales de sus dirigentes respaldando procesos democráticos contradictorios con sus comportamientos anti-democráticos al beneficiarse de su asociación con dicha presencia. Esta dinámica puede contribuir a perpetuar la amenaza y la coacción de ETA, aun en situación formal de alto el fuego, al tiempo que se garantiza el fortaleci-

⁴² Savater, Fernando: “Debajo de la mesa”, en: *El País*, 27/01/2006.

miento electoral de su brazo político y la legitimación de la violencia. Así se infería de las advertencias del dirigente del movimiento cívico ¡Basta Ya! Fernando Savater al criticar la necesidad de “concesiones” como la de la mesa de partidos extraparlamentaria defendida desde ámbitos afines al gobierno: “Se trata de una concesión estrictamente política y no menor, a mi juicio. ¿Serán de igual calibre el resto de las ‘mínimas’ concesiones? Después de su reunión con Batasuna, Patxi López dijo que habría que hacer próximamente sacrificios aún más dolorosos que ése. Dolorosos... ¿hasta qué punto y para quién? Lamento ser tenebroso, pero es que me hallo en tinieblas. Y la propaganda gubernamental no logra sacarme de ellas”.⁴³

En su decadencia grupos como IRA y ETA buscan perpetuarse coaccionando a actores políticos y sociales mediante la promesa de una desaparición que no llega si la respuesta gubernamental se traduce en concesiones que demuestran la eficacia de mantener a la organización terrorista, pues esta presencia garantiza contraprestaciones que sin ella no se producirían. Dicha dinámica favorece la peligrosa legitimación de quienes han utilizado la violencia obstaculizando una verdadera normalización política y el logro de la paz. Es por ello por lo que un diálogo paralelo entre el gobierno y ETA al tiempo que los partidos discuten con Batasuna la reforma del marco estatutario, amenaza con consolidar un grave déficit democrático. Las negociaciones políticas se realizarían sin la desaparición de una organización terrorista cuya mera declaración de cese de actividades violentas no constituye una prueba inequívoca de su voluntad de poner fin a su existencia. Como el referente norirlandés demuestra, la mera presencia de una organización terrorista condiciona procesos políticos en los cuales participa el partido que la representa al favorecer una coacción que en absoluto incentiva su definitiva disolución.

Bibliografía

ALONSO, Rogelio (2006): “Ante el final del terrorismo de ETA: lecciones y errores de la experiencia norirlandesa”, en: *Análisis del Real Instituto Elcano*, ARI N° 51/2006, mayo.

⁴³ Savater, Fernando: “Aclaración sobre la paz”, en: Cartas al Director, *El País*, 14/07/2006.

- (2005): “El nuevo terrorismo: factores de cambio y permanencia”, en: Blanco, Amalio/del Águila, Rafael/Sabucedo, José Manuel (eds.): *Madrid 11-M. Un análisis del mal y sus consecuencias*. Madrid, pp. 113-150.
- (2004): “Pathways out of terrorism in Northern Ireland and the Basque Country: the misrepresentation of the Irish model”, en: *Terrorism and Political Violence*, volumen 16, número 4, pp. 695-713.
- (2003): *Matar por Irlanda. El IRA y la lucha armada*. Madrid.
- BARREIRO, Belén (2004): “14-M: Elecciones a la sombra del terrorismo”, en: *Claves de Razón Práctica*, número 141, pp. 14-22.
- BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES (2005): *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, VIII Legislatura, 14 de julio, Número 242.
- CORTES GENERALES (2004): *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, Comisiones de Investigación, Año 2004, VIII Legislatura Núm. 18, Sesión Núm. 31, 18/11.
- EUROPOL (2003): *Terrorist Activity in the European Union: Situation and Trends Report (TE-SAT)* October 2002-15 October 2003, 3/12/2003.
- DOMÍNGUEZ, Florencio (1998): *De la negociación a la tregua. ¿El final de ETA?* Madrid.
- GIL CALVO, Enrique (2005): *11-14 M: De la masacre al vuelco electoral. El cambio trágico*. Madrid.
- IRUJO, José María (2005): “El agujero. España invadida por la yihad”. Madrid.
- Juzgado Central de Instrucción N° 005, Madrid, *Sumario (Proc. Ordinario)* 0000035/2001 E, 17/09/2003.
- Juzgado Central de Instrucción N° 006, Audiencia Nacional, Madrid: *Sumario N° 20/2004*, Madrid, Auto, 10/04/2006.
- LAGO, Ignacio/MONTERO, José Ramón (2005): “Los mecanismos del cambio electoral. Del 11-M al 14-M”, en: *Claves de Razón Práctica*, 149, pp. 36-45.
- “Lucha contra el Terrorismo”, Resolución número 32 aprobada por el Pleno de la Cámara. *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, número 206, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, 20 de mayo de 2005.
- MICHAVILA, Narciso (2005): *Guerra, terrorismo y elecciones: incidencia electoral de los atentados islamistas en Madrid*. Real Instituto Elcano, Documento de Trabajo N° 13/2005, 10/03.
- MORRISON, Danny (1999): *Then The Walls Came Down. A Prison Journal*. Dublin.
- OLMEDA, José Antonio (2005): *Miedo o engaño: el encuadramiento de los atentados terroristas del 11-M en Madrid y la rendición de cuentas electoral*, Real Instituto Elcano, Documento de Trabajo N° 24/2005, 24/06.
- RAPOPORT, David/Weinberg, Leonard (2000): “Elections and Violence”, en: *Terrorism and Political Violence*, 12, pp. 15-50.

- REINARES, Fernando (2004): “Al Qaeda, neosalafistas magrebíes y 11-M: sobre el nuevo terrorismo islamista en España”, en: Reinares, Fernando/Elorza, Antonio (eds.): *El nuevo terrorismo islamista. Del 11-S al 11-M*. Madrid, pp. 14-43.
- (1999): *Terrorismo y antiterrorismo*. Barcelona.
- SANTAMARÍA, Julián (2004): “El azar y el contexto”, en: *Claves de Razón Práctica*, 146, pp. 28-40.
- SCHMID, Alex (1989): “Terrorism and the Media: The Ethics of Publicity”, en: *Terrorism and Political Violence*, 1, pp. 539-565.
- VALENZUELA, Javier (2002): *España en el punto de mira. La amenaza del integrismo islámico*. Madrid.